

UNO + UNO

NUEVO GOLPE AL MOVIMIENTO SINDICAL ARGENTINO

BUENOS AIRES, 16 de agosto (PL). — La dictadura militar que encabeza Jorge Rafael Videla decretó hoy una nueva ley de obras sociales con el objeto de apartar a las organizaciones sindicales de la administración de los fondos sociales y sanitarios de los trabajadores. Ahora los gremios tendrán vedado el derecho a prestar cualquier tipo de asistencia médica a sus afiliados.

UNO | MAS | UNO

El general Meza acusó a monseñor Manrique de tener "concomitancia con el extremismo"

LA PAZ, 16 de agosto (AP, AFP, EFE, Latin y PL). — La dictadura del general Luis García Meza, que mañana cumplirá un mes en el poder, lanzó hoy nuevas condenas a la Iglesia Católica y acusó al arzobispo de esta capital, monseñor Jorge Manrique, de "tener concomitancia con el extremismo".

"Es una verdadera vergüenza que un sacerdote que lleva sotana y tiene que decir la verdad y hablar a través de la prédica y la Biblia se refiera a otras cosas", dijo García Meza, aludiendo a las declaraciones de monseñor Manrique, en las que ha denunciado la represión y las violaciones a los derechos humanos.

García Meza añadió que "nosotros como militares llevamos uniforme, que es como la sotana de los curas, y somos menos mentirosos. Raro que un obispo boliviano tenga injerencia con los tercermundistas". Monseñor Manrique fue acusado en días pasados de estar vinculado al "extremismo comunista" por un supuesto grupo de religiosos del departamento de Cochabamba, que hizo pública una carta a través del Ministerio del Interior.

El ministro castrense Luis Arce Gómez calificó al prelado de "conotado agitador" y dijo que "no se han tomado medidas contra él sólo por su avanzada edad, pero todo tiene su límite", amenazó. La represión gubernamental, en efecto, no ha alcanzado sólo a los trabajadores y a las fuerzas políticas democráticas, sino tam-

bién a los religiosos y periodistas, tanto nacionales como extranjeros destacados aquí.

Las acusaciones contra monseñor Manrique fueron hechas por televisión en cadena nacional y los observadores no descartan la posibilidad de que se le detenga como a otros sacerdotes y monjas o que incluso se le asesine, como ocurrió con el arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero.

En tanto, se publicó hoy una lista de 11 presos políticos detenidos en Cochabamba, con lo que el número de prisioneros de opinión identificados por el régimen alcanza más de un centenar. Ayer la junta castrense dijo que en total hay 500 presos políticos desde el derrocamiento de la presidenta Lidia Gueiler, pero diversos organismos defensores de los derechos humanos coinciden en que éstos son más de dos mil.

A sólo unas horas de cumplirse un mes de dictadura militar, un balance extraoficial del Ministerio del Interior consideró que "no ha habido absolutamente ninguna reacción fuerte como para desestabilizar la ubicación del gobierno en la presidencia, o de las fuerzas armadas en función de poder".

"Se creyó que todo sería por la fuerza —¿cómo ha sido entonces?— pero los hechos concretos afirman lo contrario", se comentó en medios gubernamentales, donde también se dijo que el régimen

contactó con los mineros para que depusieran la huelga antigolpista y que actualmente existe "paz y seguridad en el país, bajo un marco de tranquilidad".

Para los sostenedores del régimen *de facto*, la "deteriorada imagen en el exterior cambiará paulatinamente, en virtud de una realidad fácilmente verificable por los organismos internacionales que así lo deseen".

El diario *The New York Times* comentó hoy, en un editorial, que los militares argentinos pueden reclamar sin dudas la "paternidad" del golpe de Estado en Bolivia. "Su actitud es deplorable —dice el periódico—, pero más impactante aún es la sospecha de que oficiales argentinos participaron directamente en la asonada".

"La cooperación entre los dos regímenes —continuó *The New York Times*— es cuestión de interés mutuo. La junta boliviana necesita amigos para mejorar su imagen luego de la interrupción de elecciones libres, asesinatos y brutalidades, y sus presuntas conexiones con el tráfico internacional de narcóticos. Los intereses de Argentina son también claros. Una vecina democracia 'hubiera diseminado ideas contrarias a nuestro modo de vida y la permanencia aquí de un gobierno militar', en palabras del dictador Jorge Rafael Videla".